

IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPREMO

SALA ESPECIAL

Edicto

Don Francisco José Hernando Santiago, Presidente del Tribunal Supremo y de la Sala especial del art. 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial:

Hace saber: Que en los procedimientos acumulados números 6 y 7 del año 2002 seguidos a instancia de la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal interesando la declaración de ilegalidad de los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, se ha dictado sentencia con fecha 27 de marzo de 2003 cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Supremo:

Don Francisco José Hernando Santiago.

Magistrados:

Excmos. Sres.:

Don Ignacio Sierra Gil de la Cuesta.
Don Luis Gil Suárez.
Don José M^a Ruiz-Jarabo Ferrán.
Don Luis Román Puerta Luis.
Don Emilio Pujalte Clariana.
Don Alfonso Villagómez Rodil.
Don Aurelio Desdentado Bonete.
Don Fernando Ledesma Bartret.
Don Enrique Bacigalupo Zapater.
Don Fernando Pérez Esteban.
Don Francisco Marín Castán.
Don Agustín Corrales Elizondo.
Don Agustín Puente Prieto.
Doña Milagros Calvo Ibarlucea.
Don José Manuel Maza Martín.

«En la Villa de Madrid, a veintisiete de marzo de 2003.

Vistos los procesos acumulados núm. 6/2002 y 7/2002, seguidos a instancias de la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal sobre ilegalización de partidos políticos, siendo partes demandadas los partidos políticos Herri Batasuna; Euskal Herritarrok y Batasuna, los dos primeros en situación de rebeldía y el último representado por la Procuradora D^a Ana Lobera Argüelles y defendido por el Letrado D. Íñigo Iruín Sanz...

Fallamos: Que debemos estimar y estimamos integramente las demandas interpuestas por el Sr. Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, y por el Ministerio Fiscal y en su consecuencia: Primero.—Declaramos la ilegalidad de los partidos políticos demandados, esto es, de Herri Batasuna, de Euskal Herritarrok y de Batasuna. Segundo.—Declaramos la disolución de dichos partidos políticos con los efectos previstos en el art. 12.1 de la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos. Tercero.—Ordenamos la cancelación de sus

respectivas inscripciones causadas en el Registro de Partidos Políticos. Cuarto.—Los expresados partidos políticos, cuya ilegalidad se declara, deberán cesar de inmediato en todas las actividades que realicen una vez que sea notificada la presente sentencia. Quinto.—Procédase a la apertura de un proceso de liquidación patrimonial de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna en la forma que se establece en el art. 12.1.c) de la Ley orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, lo que se llevará a cabo en ejecución de la presente sentencia. Todo ello sin efectuar especial pronunciamiento respecto de las costas procesales causadas en los procesos acumulados que enjuiciados quedan. Notifíquese esta sentencia a las partes personadas y a las declaradas rebeldes en la forma prevenida en la Ley, haciéndoles saber que la misma es firme, definitiva y ejecutiva, así como que contra la misma, de conformidad con lo establecido en el art. 11.7 de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, no cabe recurso alguno, sin perjuicio, en su caso, del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

Y para que sirva de notificación a los partidos políticos Herri Batasuna y Euskal Herritarrok, en situación de rebeldía y para su publicación en el Boletín Oficial del Estado, expido y firmo el presente en Madrid, a veintiocho de marzo de 2003.—El Presidente, Francisco José Hernando Santiago.—11.590.

TRIBUNAL DE CUENTAS

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Departamento Segundo

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo ordenado por el Excmo. Sr. Consejero de Cuentas del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, mediante providencia de fecha 11 de marzo de 2003, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º B—24/03, de Entidades Públicas (Correos), Madrid, que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro, como consecuencia de un presunto alcance habido en la Unidad de Reparto de la Oficina Técnica de Correos y Telégrafos de Coslada (Madrid).

Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable, puedan comparecer en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este Edicto.

Dado en Madrid, a once de marzo de dos mil tres.

Madrid, 11 de marzo de 2003.—El Secretario del Procedimiento, Juan Carlos López López.—10.686.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

BARAKALDO

Edicto

Doña Leonor Fernández Benito, Magistrado-Juez de Primera Instancia número 1 de los de Barakaldo (Bizkaia),

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 27/03 se sigue a instancia de Alfredo Arnaiz Murias expediente para la declaración de fallecimiento de Bruno Arnaiz Gómez, natural de Quintanilla Rucandio (Cantabria), de 103 años de edad, quien se ausentó de su último domicilio en Santurce, no teniéndose de él noticias desde el año 1939, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noticias de su existencia puedan ponerlo en conocimiento del Juzgado y ser oídos.

Barakaldo (Bizkaia), 7 de febrero de 2003.—El/La Magistrado-Juez.—El/La Secretario.—10.812.

1.ª 29-3-2003

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Edicto

Don Mario Martín García Guerra, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Las Palmas de Gran Canaria y su Partido,

Por el presente se hace público que en este Juzgado con el número 172/03, se siguen autos de Juicio Universal de Quiebra necesario de la Sociedad Mercantil Ríos y Pelarda, Sociedad Limitada, con domicilio social en la Plaza de la Concordia número 4, de Las Palmas de Gran Canaria, Código de Identificación Fiscal B35389964, inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, al tomo 1205, folio 46, hoja GC-12202, con el objeto social de asesoramiento y gestión de promociones inmobiliarias, habiéndose acordado por Auto de esta fecha declarar a la entidad referida en estado de quiebra necesaria, en la que se ha designado como comisario de la quiebra a don Rafael Franco Miranda y depositario a don Juan José Cabrera Pérez, comerciantes de esta localidad, retrotrayéndose, sin perjuicio de tercero, los efectos de la quiebra al día 1 de agosto de 2002.

La entidad quebrada ha quedado incapacitada para la administración y disposición de sus bienes, advirtiéndose a las personas que tuvieren en su poder bienes pertenecientes al quebrado que deberán hacer manifestación de ellas al Comisario, bajo apercibimiento de complicidad, y aquellas otras que adeuden cantidades al quebrado, hagan entrega de ellas al Depositario bajo apercibimiento de no reputarse legítimo el pago.

Se ha decretado la acumulación a este juicio universal de quiebra de todos los pleitos y ejecuciones que hubiere con excepción de los que la Ley excluye.

Asimismo, se ha acordado la retención de la correspondencia postal y telegráfica de la Sociedad quebrada.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a, 5 de marzo de 2003.—El/la Magistrado-Juez.—El/la Secretario.—10.814.

LEBRIJA

Cédula de notificación

En el procedimiento de menor cuantía 46/1999, seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Lebrija, a instancia de don Joaquín Caballero Ortega, contra don Juan Marín Guerrero, doña Ana Molero Elena, doña Josefa Molero, Elena, don Rafael Fuentes Rodríguez, don José Antonio López Muñoz, doña Josefa Fernández Domínguez, don Andrés Gordillo Luna, doña Rosa María Gordillo Rodríguez y herederos de Carmen Torres Gutiérrez, sobre menor cuantía, se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sentencia

En Lebrija, a veinticinco de octubre de dos mil dos.—Doña Paloma Melgar Moreno, Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de los de Lebrija y su partido; habiendo visto los presentes autos de juicio de menor cuantía sobre reclamación de cantidad, seguidos con el número 46/99, a instancia de don Joaquín Caballero Ortega, contra don Juan Marín Guerrero, doña Ana Molero Elena, doña Josefa Molero Elena, don Rafael Fuentes Rodríguez, don José Antonio López Muñoz, doña Rosa María Gordillo Rodríguez, doña Josefa Fernández Domínguez, don Andrés Gordillo Luna y herederos de doña Carmen Torres Gutiérrez.

Fallo

Que desestimando la demanda interpuesta por don Joaquín Caballero Ortega, contra don Juan Marín Guerrero, doña Ana Molero Elena, doña

Josefa Molero Elena, don Rafael Fuentes Rodríguez, don José Antonio López Muñoz, doña Rosa María Gordillo Rodríguez, doña Josefa Fernández Domínguez, don Andrés Gordillo Luna y herederos de doña Carmen Torres Gutiérrez, absuelvo a los demandados de los pedimentos contra ellos formulados, con imposición de costas al actor.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los demandados herederos de doña Carmen Torres Gutiérrez, extiendo y firmo la presente en Lebrija a veintisiete de febrero de dos mil tres.—El/La Secretario.—10.368.

MADRID

Edicto

Doña Silvia Abella Maeso, Magistrado-Juez de Primera Instancia número 67 de Madrid,

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dictada en el expediente de Suspensión de pagos de la Sociedad Systems Maintenance Services Corporate, Sociedad Anónima, autos 568/2002, he acordado convocar Junta General de acreedores para el día 19 de mayo de dos mil tres, a las 12 horas 30 minutos, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, habiendo mantenido la calificación de insolvencia definitiva. Los acreedores podrán comparecer personalmente o por medio de otra persona a favor la cual se haya otorgado poder notarial bastante que deberá exhibir en el acto de la celebración de la Junta.

Dado en Madrid, 21 de febrero de 2003.—La Magistrado-Juez.—El/la Secretario.—10.509.

TORRELAVEGA

Cédula de notificación

Que en este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Torrelavega se sigue expediente de jurisdicción voluntaria de consignación

y cancelación de obligación hipotecaria por extravío de letra de cambio bajo el número 481/02, instados por el Procurador señor Cruz González, en nombre y representación de «Pycapa, Sociedad Limitada», en el que se ha dictado la resolución que a continuación se transcribe:

«Providencia.—Juez que la dicta: Don Juan José Gómez de la Escalera.

Lugar: Torrelavega.

Fecha: 16 de diciembre de 2002.

Por recibidos los anteriores resguardos de ingreso procedentes del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, únanse a los autos de su razón, se tiene por consignada la cantidad de 490,93 euros, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado; no siendo necesario el ofrecimiento de pago de la misma por constar en la copia autorizada de escritura de cancelación de hipoteca cambiaria otorgada por don Pablo Donoso Arribas a favor de don Joaquín Mazón Arroyo y doña Modesta Saiz García, en Bilbao a 9 de septiembre de 2002, con número de protocolo 2427, ante el Notario don Eduardo Ares de Parga Saldías, que el mencionado don Pablo Donoso Arribas manifiesta que la letra de cambio de la clase 9.ª, serie EC, número 0231892, objeto de autos, fue pagado por los librados y ha sido extraviada, por el mismo como tenedor de la letra y acreedor hipotecario.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 156, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria, y previamente a la cancelación total de la carga hipotecaria, se debe proceder a los dos llamamientos por edictos publicados en el «Boletín Oficial del Estado» y por tiempo de dos meses cada llamamiento, a cuantos se consideren con derecho a oponerse a la cancelación.

Se extiende el presente edicto, para proceder a los dos llamamientos por edictos y por tiempo de dos meses a cuantos se consideren con derecho a oponerse a la cancelación.»

Torrelavega, 16 de diciembre de 2002.—El/la Secretario.—2.224.

y 2.ª 29-3-2003